



La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que recorre ahora los trámites de discusión parlamentaria y aprobación, llega después de casi dos años económica y socialmente desoladores, marcados por una pandemia que ha deteriorado todas las magnitudes macroeconómicas y todos los indicadores sociales.

Contra la opinión de todas las instituciones económicas, nacionales e internacionales, y esperanzados en los efectos de los fondos europeos, los nuevos Presupuestos parten de unas previsiones muy optimistas que ni siquiera la escalada de los precios energéticos, las dificultades de suministro de materias primas o componentes, y el repunte de la inflación han enfriado.

Ese optimismo que no encuentra apoyo en la realidad económica y empresarial que se refleja en todas las previsiones, salvo las gubernamentales, ha definido una política que, lejos de buscar la consolidación de las finanzas públicas, incide en la expansión del gasto público estructural, sin incorporar medidas que aseguren su eficiencia y su calidad, y comprometiendo la credibilidad de nuestra sostenibilidad fiscal.

Ese riesgo fiscal va a perjudicar la inversión y la creación de empleo y debilitará la recuperación que, lejos de lo que refleja el cuadro macroeconómico del Gobierno, está todavía necesitada de impulsos que la refuercen y se verá perjudicada por un ajuste fiscal que recaea en su mayor parte –en torno al 70 por ciento– sobre las empresas perjudicando su competitividad.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 parecen redactados sin considerar las cifras de Contabilidad Nacional relativas del tercer trimestre de 2021, de las que se desprende que la recuperación económica no está todavía consolidada y que el ritmo de crecimiento es mucho más moderado de lo que se podía prever.

El consenso de las previsiones sitúa el crecimiento para el conjunto de 2021 por debajo del 5 por ciento, y el cuadro macroeconómico del Gobierno que prevé un crecimiento del PIB del 6,5 por ciento para el presente año y del 7 para 2022, lo ignora y, con ello, distorsiona y compromete todas las previsiones de los Presupuestos.

La relajación del rigor fiscal y la llegada de los fondos europeos han impulsado un gasto en máximos históricos lo que, lejos de ser una virtud como preconizan los autores de los Presupuestos 2022, va a comprometer a medio plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas y obligará en el futuro a una mayor presión fiscal que perjudicará la inversión y la actividad.

El gasto corriente que crece en pensiones, ingreso mínimo vital, cheques y subvenciones varias, abundará en el problema. La Comisión Europea estima que España será uno de los países de la Eurozona con mayor déficit estructural en 2022 y el único que lo incrementará el próximo año, lo que en ningún caso puede entenderse como virtud.

Los Presupuestos no van a servir para mejorar la eficiencia del gasto público, ni van a evitar decisiones de gasto e inversión basadas en compromisos políticos o electorales, ni van a eliminar los gastos superfluos para atender únicamente a las necesidades reales del país y de su economía. Triste ejemplo es el destino de los fondos europeos de los que casi el 30 por ciento se destinará a gasto corriente en lugar de invertirse en reforzar la economía.

Por el lado de los ingresos, la irreal previsión de crecimiento distorsiona el cuadro macroeconómico y contribuirá a abonar el incremento del déficit. De cumplirse las previsiones del gobierno, el total de los ingresos crecería un 7 por ciento respecto a 2019 y el PIB un 5,4 por ciento, lo que tras una recesión sin precedentes y con más que dudas sobre la recuperación, es inquietante.

La combinación de unos gastos en máximos históricos y menos ingresos de los previstos aboca a un mayor déficit público e impulsará la deuda pública que alcanzó el 120 por ciento del PIB en 2020 y no se reducirá ni en 2021 y ni en 2022.

Los Presupuestos 2022 no cumplen en ningún caso con lo que debería ser su primer objetivo, crear certidumbres sobre las que asentar la recuperación económica tras la pandemia que ha dejado un tejido empresarial más endeudado, con menores márgenes o en pérdidas, con costes laborales, energéticos, de transporte y fiscales crecientes, y con dificultades para la producción, como la que supone la carestía de suministros básicos.

Para resolver esos problemas, el sector productivo no va a encontrar apoyo en los Presupuestos que en su redacción no han tomado en cuenta la necesidad de crear un clima más favorable a la actividad y a la creación de empleo que son los únicos motores ciertos para el crecimiento y el incremento la recaudación tributaria, y la mejor garantía de la sostenibilidad y el mantenimiento del estado del bienestar. Los Presupuestos que España necesita deberían situar sus prioridades en la recuperación crecimiento y la productividad, en el impulso de la inversión en infraestructuras y en capital humano y tecnológico, y en la creación de empleo para, con todo ello, tener capacidad de mejorar los servicios públicos, las posibilidades de protección social y ayuda al desarrollo y luchar contra desafíos como el del cambio climático.

Atender a todas esas “circunstancias” hubiera recomendado unos Presupuestos menos expansivos en el momento económico actual. Es decir, un gasto menor y más eficiente, reducción de la necesidad de financiación externa y, sobre todo, que actuasen como elementos estabilizadores de una economía para que sea capaz de alcanzar su velocidad de cruce y mantenerla a largo plazo.

Pero estos Presupuestos han renunciado a cualquier ambición de estabilizar y corregir desequilibrios, de reducir el gasto el estructural y racionalizar los ingresos, es decir renuncian a algunos de los que deberían ser sus principales objetivos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se han elaborado con unas proyecciones de las principales variables macroeconómicas excesivamente optimistas que no sólo no están confirmadas, sino que, a la luz de la evolución última de nuestra economía, va a ser muy difícil que puedan hacerse realidad.

En una coyuntura como la actual, la dirección correcta no es el voluntarismo optimista de estos Presupuestos que, en ningún caso, asegura su función estabilizadora, ni el éxito a la hora de hacer frente a una situación económica llena de incertidumbres, algunas de las cuales, de concretarse, afectarán gravemente a la economía española.

Estos Presupuestos para 2022 ofrecían la oportunidad de modernizar la economía española y de realizar reformas estructurales para mejorar nuestra competitividad, de superar el deterioro provocado por la pandemia y de asegurar que los costes sociales que provocó se compensen y se puedan aminorar o evitar en el futuro.

Pero, elaborados de espaldas a la realidad económica y empresarial y alejados de las previsiones, análisis y recomendaciones de quienes mejor conocen esa realidad, pueden convertirse, tristemente, en una oportunidad perdida.

Unos Presupuestos de espaldas a la realidad económica y empresarial